See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/321589510>

Distancias espaciales y valoración social: servicios públicos y segregación social en bogotá, 1970–1990

Chapter · December 2017

CITATIONS

0

READS

29

2 authors:

Fabián Andrés Llano

Universitaria uniagustiniana

71 PUBLICATIONS 65 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Vanessa Andrea Cubillos Alvarado

Universidad Piloto de Colombia

6 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

PRODUCTOS, RECETAS Y EMPRENDIMIENTO: hacia el reconocimiento de la cultura gastronómica Colombiana. [View project](#)

Historia de la educación en Colombia [View project](#)

Cap. VII

Distancias espaciales y valoración social:

servicios públicos y segregación social
en Bogotá, 1970-1990

Vanessa Cubillos Alvarado
Fabián Andrés Llano
Universidad Piloto de Colombia.
Bogotá (Colombia)
Maestría en Gestión Urbana

El hombre quiere ver. Ver es una necesidad directa. La curiosidad vuelve dinámico al espíritu humano. Pero parecería que en la propia naturaleza hay fuerzas de visión activas [...] el lago, el estanque, el agua dormida nos detiene en su orilla. Dice a la voluntad ¡no iras más lejos; estás entregada al deber de mirar las cosas lejanas, las que están más allá! Mientras tú corrías, algo aquí ya miraba. El lago es un gran ojo tranquilo. El lago recoge la luz y hace un mundo con ella. Gracias a él, ya, el mundo es contemplado, el mundo es representado. También él puede decir: el mundo es mi representación.

Bachelard, *El agua y los sueños*

Los continuos procesos de privatización de los servicios públicos se han hecho visibles con las dinámicas de la globalización y con la aparición de movimientos sociales que han resistido la dinámica capitalista. Tal vez la referencia simbólica más pertinente para expresar esta situación sea la del mito ayoreo de la abuela grillo. En principio este mito indígena boliviano, que recalca la importancia del agua en épocas de sequía, se consolidó en la cultura a través de los relatos de los ayoreos sobre abuela grillo o Di-rejné (grillo más grande que es el dueño de las aguas), y luego del año 2010, gracias a la visibilización del mito a través de un corto de dibujos animados elaborado por dibujantes bolivianos y daneses, se convirtió

en un símbolo de la lucha de los bolivianos frente a la privatización del agua, y en una conmemoración de las denominadas guerras del agua.

En este sentido, aparece la experiencia boliviana, que desde 1970 venía fraguando movimientos campesinos de resistencia a la explotación de recursos hídricos para consumo de la ciudad. Históricamente el tema del agua ha sido muy sensible en la región, pues el valle de Cochabamba es una zona ecológicamente considerada semiseca, por tanto, sufre una crónica escasez del recurso. Las causas directas de las guerras del agua, argumenta Crespo (2000), han sido, por una parte, la concesión, en forma poco clara, de la empresa municipal de distribución del agua (SEMAPA) a un consorcio privado internacional, denominado Aguas del Tunari; y, por otra parte, la aprobación en el parlamento sin haber consensuado con las autoridades de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. En consecuencia, la movilización popular se fraguó por el incremento del 35% de las tarifas por parte del consorcio privado, lo que generó la organización popular para marchar hacia Cochabamba y tomarse simbólicamente la ciudad. No obstante, la difusión de la protesta en contra de Aguas del Tunari no habría sido posible sin la utilización de los medios de comunicación, que se convirtieron en una innovación del movimiento social boliviano.

La coordinadora mostró una novedosa utilización de las nuevas tecnologías de información, que anteriores movimientos sociales no habían realizado: uso de fax y correo electrónico para recibir y enviar mensajes, celulares para la comunicación de los líderes del movimiento, etc. Finalmente, el agua, al ser reivindicada como bien público, posicionó otro tipo de subjetividades desde la democracia local, que cuestionó y evidenció las falencias del sistema democrático boliviano. Este hecho dibujó las nuevas configuraciones de los movimientos sociales en Bolivia, directamente vinculados con problemáticas de la cotidianidad de la gente, como el acceso no equitativo y uso no sustentable de los recursos naturales y, de otra parte, la reevaluación de una ética solidaria de apoyo mutuo, aunque desde la diferencia (Crespo, 2000).

Esta problemática de privatización de los servicios públicos en Colombia queda en evidencia en la década de los noventa, cuando se incursionó de manera efectiva en los denominados circuitos de la apertura económica, a través de nuevas políticas económicas agenciadas por el modelo neoliberal. En este proceso, en el cual se buscaba la liberalización de las barreras arancelarias para dejar la dinamización económica a manos de la propia economía, se buscaba evitar la intervención estatal.

En 1990 asume como presidente de Colombia César Gaviria Trujillo, bajo una fuerte incidencia económica en términos de plan de gobierno, al acoger la apertura económica como uno de sus principales derroteros. En este orden de ideas, además de una ampliación de las brechas arancelarias, los servicios públicos quedaron a merced de la dinámica económica y de la empresa privada. Así, los mercados y sobre todo las ciudades se convirtieron en caldos de cultivo propicios para adelantar toda suerte de privatizaciones alrededor de las conquistas sociales de los derechos de segunda generación.

Para el caso de Bogotá, estas dinámicas económicas libraron una competencia abierta entre los mercados nacionales y extranjeros con algunos impactos en los procesos de consolidación de la ciudad. En efecto, el crecimiento poblacional representó para estas empresas transnacionales una oportunidad para ofrecer el servicio de acueducto y alcantarillado, con una mayor demanda de agua para la capital, producto del crecimiento urbano y demográfico. El consumo se vio sometido a un modelo económico depredador que aprovechó las fuentes naturales ajenas a la ciudad para ofertar el servicio en Bogotá que, valga aclarar, hace poco uso de sus aguas subterráneas. Actualmente se sostiene que el agua como derecho colectivo ha librado sendas batallas ideológicas, atravesadas por intereses económicos que ven en este recurso una forma de enriquecimiento, al disponerlo como bien privado; entonces, este debate se presentaría en torno a la vindicación del agua como derecho colectivo frente a la consolidación de la privatización de este recurso, arguyendo la incapacidad de la ciudad para administrar la provisión del agua.

Lo anterior se hace innegable durante la primera década del siglo XXI. A partir de este momento, la ciudad en Colombia es pensada en relación con la construcción de contextos y espacialidades que se correspondieran decididamente con las aglomeraciones poblacionales para evitar el crecimiento desmedido y poco planificado de la ciudad. De esta manera, el plan de ordenamiento territorial (POT), se convirtió en una herramienta indispensable para la planeación del crecimiento urbano en las ciudades colombianas a partir de la Ley 388 de 1997, en la cual se extendió la planeación a diez años. Sin embargo, estas dinámicas, que aparentemente se amalgamaron para constituir una fuerza que controlara el crecimiento de la ciudad, se resquebrajan por no tener capacidad de contención y abastecimiento frente a las nuevas demandas poblacionales que llegaban a la urbe en busca de una vida con mejores oportunidades.

Como caso paradigmático, aparece en la periferia de la ciudad formal el 12 de junio del año 2002 una manifestación poco usual en contra de la privatización de los servicios públicos: más allá de constituirse en un caso emblemático, el caso de Usme se recuerda como una manifestación simbólica de un grupo de personas que optaron por enterrarse vivos para que el Estado interviniera a favor de reestablecer sus necesidades básicas, dentro de las que se encontraban, por supuesto, el abastecimiento de agua.

Valga anotar que la legalización de los barrios que en otro tiempo eran veredas con acueductos informales se ha presentado paulatinamente con el crecimiento de la ciudad, el aumento poblacional y el crecimiento poco planificado de la ciudad, que no ha logrado controlar las dinámicas de segregación socioespacial a las que diferentes territorios se ven sometidos con la negación de los servicios públicos, por ejemplo. Como este caso, existen muchos en el país, que pueden ser encontrados por medio de un ejercicio riguroso de las historias sociales que se entretajan unas a otras, historias de desigualdades sociales y territoriales que, además de ser evidenciadas, necesitan no olvidarse, porque hacen parte de las memorias del agua en unos

lugares relacionales con identidad e historia (Augé, 1993; Cantero, 1999; Arrojo, 2005).

Este texto parte de la hipótesis de que el uso de un recurso tan importante para la subsistencia ciudadana, como lo es el agua, se convirtió en objeto de luchas entre distintos estilos de vida del espacio social bogotano. Algunos sectores de habitantes, para lograr la distinción de clase y entrar en los circuitos de pertenencia a la ciudadanía, buscaban la apropiación del agua entre 1970 y 1990. No obstante, es importante aclarar que la problemática del agua se inscribe en las reivindicaciones de los derechos de segunda y tercera generación; el problema que se presenta para este caso es la escasa visibilización del proceso histórico. Así, en las transformaciones urbanas se pueden observar cambios importantes en el espacio, pero también en el comportamiento económico y en el tejido social.

Estas imágenes en torno al derecho colectivo del agua en Bogotá son afectadas por los desequilibrios económicos y la ausencia del Estado, el cual, arguyendo la incapacidad de la ciudad para administrar la provisión del agua, optó por la privatización de los servicios. Además, hacen parte de los discursos descontextualizados con los que la ciudad se ha relacionado a través del tiempo con sus habitantes, e incluyen además los diferentes comportamientos que de esta dinámica se despliegan, los rituales que se ejecutan y las normas éticas que se establecen entre el Estado y los ciudadanos.

Desde un marco teórico sobre la segregación socioespacial, el presente capítulo retoma los desequilibrios entre los territorios y los servicios públicos en una época de crecimiento urbano en Bogotá. Vale la pena recordar que los estudios sobre segregación social son escasos y, aunque hay consenso en sostener que la segregación residencial remite a formas de desigual distribución de grupos de población en el territorio (Lévy y Brun, 2002 citados en Arriagada y Rodríguez, 2003), es relevante caracterizar sus matices. En este sentido, la segregación social es conceptualizada como un fenómeno socioespacial que posibilita la diferenciación social. Usualmente en las investigaciones sociales,

advierde Bourdieu, en cuanto al estudio de fenómenos como el *guetto*, se acudía al espacio en el que se presentaban estos fenómenos, que eran observados por el investigador como exóticos, descartando las relaciones que estos pudieran tener con otros espacios sociales y mucho menos con aspectos tan ocultos como la distinción social a propósito de la *guettización*:

la “guettización” es un hecho provocado por el peso de unas estructuras económicas, sociales, políticas y culturales que fragmentan la ciudad, que provocan la marginalidad pero que, más allá, la naturalizan para determinados agentes sociales, que por lo mismo puede crear la imagen de unos emplazamientos naturalmente conflictivos o violentos, desactivando que las contradicciones urbanas, manifiestas con intensidad en unos lugares son, no obstante, provocadas en el conjunto de dinámicas que definen a la ciudad como un todo. (Serna y Gómez, 2009)

Como solución a esta limitante, Bourdieu propuso un análisis riguroso de la estructura social y el espacio físico dentro de un campo mayor que ha denominado el espacio social, el cual se explicará más adelante a propósito de las ganancias de localización y las distancias espaciales. Como afirma Wacquant (2006), las apreciaciones que desconocen las configuraciones históricas y sociales ocultan las diferencias sociales y económicas en las dinámicas urbanas, amparadas en políticas de invisibilización de la pobreza, que posibilitan la estigmatización de espacios que tienden a la involución económica y al deterioro social¹.

¹ El estudio de la realidad social generalmente dispone de un fraccionamiento de la realidad que reduce los fenómenos sociales a fragmentos sin conexión y carentes de significación. De este modo, caracterizar la relación entre desarrollo urbanístico y dotación de servicios públicos implica necesariamente vincular a la discusión el conflicto de la desregulación de la economía.

Valga realizar la siguiente analogía, con el fin de refrescar las intencionalidades de la investigación: como los nenúfares, los bogotanos desconocemos las raíces, los rizomas que alimentan la vida y, únicamente viviendo en la superficialidad del lago, nos negamos a introducirnos en él para reconocernos en las aguas profundas que necesariamente nos vinculan con la contemplación de la identidad, con el reconocimiento del otro y, además, con esa naturaleza dual que caracteriza al ser humano. Por tal motivo, se hace indispensable reflexionar no solo sobre lo que es aparente a los sentidos, con una mirada fija a los fenómenos sociales, sino indagar en lo que se esconde en el fenómeno, tal cual indica Bachelard:

Ante las aguas narciso tiene la revelación de su identidad y su dualidad [...], el agua sirve para naturalizar nuestra imagen, para concederle algo de inocencia y naturalidad al orgullo de nuestra íntima contemplación en [el ojo de la tierra que es el agua], [...] en la naturaleza sigue siendo el agua la que sueña [...]. De este modo, el agua es la mirada de la tierra, su aparato de mirar el tiempo. (1993, pp. 45-54)

Dimensión cultural del agua y ganancias de localización

Los usos sociales del agua en Bogotá no pueden escapar a las dinámicas económicas, sociales y culturales que se han configurado en la ciudad desde décadas anteriores. Por esta razón, resulta fundamental hacer una contextualización de las relaciones entre apropiación del recurso hídrico y las dinámicas urbanas de la ciudad desde la década del setenta, época en la cual se pueden evidenciar grandes cambios urbanísticos.

Las visiones de mundo de los habitantes se ven afectadas por transformaciones de la ciudad, que determinan a su vez las percepciones que puedan tener de ésta. En el caso de la apropiación y el uso social del agua, esta no puede ser pensada al margen de los procesos

de transformación de la urbe, lo que implica un pensamiento relacional apoyado por nociones como el espacio social que brinda posibilidades metodológicas para abordar el problema de la relación entre consumo de agua y ciudad, para desde allí moverse a resolver el interrogante de las representaciones sociales.

Generalmente la problemática de la escasez y apropiación desigual del recurso se ha asociado en pequeña escala con los efectos ecológicos y ambientales que produce el fenómeno del niño, junto con las problemáticas ambientales relacionadas con la agricultura y la privatización de los servicios públicos. En efecto,

los conflictos ambientales por el uso del agua en el país son de diversa naturaleza y magnitud y surgen de distintas fuentes. Por un lado, aparecen las tensiones de competencia entre distintos tipos de usuarios ajenos o pertenecientes al sector, los intereses comerciales, las presiones poblacionales y los distintos roles de las instituciones ambientales y no ambientales. Por otro, surgen problemas relativos a la utilización inadecuada del riego, que tienen su origen o bien en la falta de conocimientos técnicos, en las debilidades económicas de ciertos sub-sectores para adquirir equipos adecuados, en dificultades de infraestructura, limitado acceso físico a las explotaciones agrarias o condiciones geo-morfológicas o edafológicas que se oponen al uso eficiente del agua (Colmenares & Mira, 2007, p. 18).

Sin embargo, a estas problemáticas es necesario sumarle también otras de tipo cultural y social, que permiten evidenciar las luchas sociales por la apropiación de este recurso a manos de distintas posiciones en el espacio social bogotano². Para el abordaje de esta relación entre

²Las relaciones entre espacios físicos y sociales contienen unas confrontaciones dadas en el hábitat. Estas relaciones de fuerza se pueden evidenciar en las relaciones espaciales que traen las objetivaciones del espacio social; esto es, que el espacio físico trae consigo unas propiedades que sólo son explicable si se ponen en relación con otros espacios físicos. Las cualidades que le son inherentes y la escala de valor con la que son percibidos son otorgadas por el espacio social para generar distinciones sociales (Bourdieu, 1999, pp. 119-124).

las dimensiones culturales del agua y el espacio social donde se desarrollan las prácticas y las creencias en torno su uso social, se acudió a un enfoque relacional que evidenció las condiciones que hicieron posible una visión del agua reducida al uso antropocéntrico de este recurso en esta ciudad desde los años setenta hasta la década del noventa.

Para la disertación de las condiciones del universo en mención, fue necesario acudir a tres elementos indispensables. En primer lugar, la caracterización del escenario económico, que juega un papel preponderante en la definición de las condiciones de la ciudad y apunta a la proyección de capitales, inversiones e intereses que tiene el agente para buscar una posición dentro del espacio social. Valga aclarar que este enfoque se complementó con los planteamientos de Kaztman, quien argumenta que:

La localización de los pobres dentro de esa estructura varía no sólo según la profundidad de las brechas que los separan de otras categorías sociales en el mercado de trabajo, sino también según el grado de segmentación en cuanto a la calidad de los servicios de todo tipo y el grado de segregación residencial. (2001, p. 172)

El segundo elemento, desde la teoría bourdiviana del espacio social, se dispuso a ubicar las ganancias de localización de los agentes en el espacio físico, que como ya se ha mencionado, se retraduce en el espacio social. Estas influencias se observaron principalmente en las posiciones que ocupaban los distintos grupos sociales. Los lugares y sitios del espacio social objetivado y los beneficios que traen son apuestas de luchas, y las ganancias asumen la forma de ganancias de localización. Metodológicamente, se pueden analizar en ganancias de renta, ubicación en sitios donde los bienes son escasos, equipamientos educativos culturales o sanitarios y las ganancias de posesión monopólica de una propiedad distintiva; la posesión de este espacio físico puede ser una manera de mantener a distancia las intrusiones indeseables (Bourdieu, 1999).

Por último, estas luchas y dinámicas de apropiación de capital se evidenciaron a través de los estilos de vida en los escenarios cotidianos.

En este sentido, se observó la imposición de un principio de visión y de división del espacio social, en el cual se configuraron algunos distanciamientos sociales en torno a los usos sociales del agua, junto con la apropiación desigual de este recurso en la ciudad.

Carenia de agua en la ciudad y fracciones urbanas devaluadas

La ciudad de los setenta y ochenta

Bogotá, entre la década de los setenta y los ochenta, asistía a un período económico de aparentes cambios en el sistema socioproductivo que, por supuesto, movilizó la estructura social de la urbe, por medio de la tecnificación y la industrialización que consiguió el país para la competición en mercados internacionales. Sin embargo, esta preparación, que se pensaba que se iba a realizar a través del proceso de sustitución de importaciones, no logró preparar a la industria para la competencia y la tecnificación; más bien, dispuso las condiciones de una economía conservadora que, por medio de la protección a la industria, logró que

los recursos generados en esta época se invirtieran principalmente en incrementar la capacidad de producción de café y en acumular existencias y reservas internacionales [...], la acumulación de existencias y reservas, y el nivel relativamente bajo en equipamiento y construcción, son dos caras de la misma moneda: el resultado de una drástica política compensatoria que limitó severamente el potencial expansivo de la bonanza. (Perry, 1989, p 37)

Es importante resaltar que la economía colombiana, aunque se vio beneficiada por la helada brasilera en cuanto a la producción de café entre 1976 y 1980, no desarrolló otras industrias competitivas. Al respecto, Arango, Misas y López, señalan que la economía colombiana estuvo sometida, entre finales de la década del cuarenta y mediados de los setenta a fuertes oscilaciones cíclicas, originadas por

las fluctuaciones de los precios del café; hasta los inicios de los años setenta la disponibilidad de divisas provenía en gran medida de ese solo producto (Arango, Misas y López, 2006).

De esta manera, la economía colombiana se limitó a la exportación de un único producto, deteriorando las relaciones comerciales con otros países. Esta tendencia permanecerá durante los años ochenta, considerado como un período de recesión de la economía colombiana. El deterioro del sector externo indujo un prolongado proceso recesivo, que se agudizó por problemas de oferta agrícola. El producto interno bruto (PIB) creció apenas un 1,8% en promedio anual y la industria 0,6% entre 1980 y 1984, con decrecimientos netos en 1981 y 1982 (Perry, 1989).

Los excedentes económicos, resultado de la explotación de un único producto, fueron administrados y centralizados por formas oligopólicas que impedían la entrada de nuevos productores a la competición, lo que retardó el crecimiento económico y la tecnificación de la industria colombiana, inhibió la movilidad social y aumentó el desempleo. En este sentido, la población económicamente activa creció mucho más rápidamente que la capacidad de la economía para absorber nuevos trabajadores, en particular en su sector moderno; en consecuencia, se generó un excedente de población que alimentó el ya pletórico sector de servicios personales, con remuneraciones inferiores al salario mínimo y altos niveles de desempleo y subempleo (Arango, Misas, López, 2006).

A las dinámicas económicas expuestas anteriormente se sumarían los fenómenos de migración del campo a la ciudad potenciados por la violencia de mitad de siglo, que, por efectos de la cohesión y orden social, el Frente Nacional trató de desarticular, a través de la canalización de la violencia por parte de los partidos tradicionales. En realidad, la economía urbana se enfrentaba a una serie de contradicciones estructurales que no lograba resolver. Al respecto, Serna plantea:

En primer lugar, con unas elites industriales, comerciales y financieras que por efectos de los oligopolios pudieron robustecer sus capitales económicos, sociales y simbólicos. En segundo lugar,

una estructura insolvente para captar la mano de obra disponible, situación tanto más agudizada por la migración rural. En tercer lugar, una estructura con unas masas trabajadoras cada vez más empobrecidas por efectos de la pauperización del salario y el alto costo de vida. En cuarto lugar, una estructura sostenida por un Estado que debía garantizar sus condiciones de funcionamiento a costa de incrementar su deuda por medio de empréstitos externos en detrimento de la inversión privada. (2006a, p. 213)

De esta manera, se genera un espacio social con pocas posibilidades de dinamización en cuanto a su movilidad social, que se proyectaba en decremento. Es importante advertir que estas contradicciones estructurales pueden convertir las disparidades de ingresos en disparidades sociales, produciendo cambios en la estructura social que alimentan el aislamiento de los pobres urbanos.

En primer lugar se reducen los ámbitos de sociabilidad informal entre las clases a que da lugar el uso de los mismos servicios. Segundo, también se encoge el dominio de problemas comunes que los hogares enfrentan en su realidad cotidiana. Tercero, los servicios públicos pierden el importante sostén que se derivaba del interés de los estratos medios (donde se concentran los que tienen “voz”) por mantener la calidad de las prestaciones que utilizaban, activando de ese modo un círculo vicioso de diferencias crecientes de calidad entre los servicios públicos y los privados, lo cual tiende a deteriorar aún más la posición de los pobres con respecto al resto de la sociedad. (Kaztman, 2001, p. 173)

En 1975, Colombia, según establece Bejarano (1989), citado por Tirado (1989), estaba en el grupo de países que ostentaban la desigualdad más alta en la distribución del ingreso, a tal punto que sólo éramos superados por ocho países en la concentración del ingreso. Así las cosas, grandes masas que se instauraban en la ciudad, por efectos de la migración y el desempleo, se veían estancadas en una estructura que tendía al estancamiento o la estrangulación de las masas en ascenso; al respecto,

en la década de los setenta, en un estudio realizado por Parra Sandoval se sostiene lo siguiente.

La aparente corriente de movilidad social de que ha gozado la vida urbana en Colombia es pues cada vez más reducida en términos globales urbanos y cada vez más restringida a grupos específicos pequeños que se colocan en posiciones especialmente burocráticas para los cuales existen prerequisites educativos que están únicamente al alcance de grupos medios o altos. (1977, p. 384)

Este panorama muestra una ciudad cerrada a la movilidad social por los efectos de la economía y, por supuesto, por el fenómeno estructural de migración a la urbe, que reclamaba un proceso de urbanización más acelerado e incluyente. Entre 1951 y 1973, la distribución territorial de la población colombiana, entre sectores rural y urbano, invirtió sus proporciones: si en 1951 de cada 10 habitantes 6 vivían en el campo, en 1973 un poco más de 6/10 de la población era –según las definiciones censales– considerada urbana (González y Flórez, 1977). En este sentido, la calidad de vida no podía escapar a la relación entre ingreso y propiedad, marcando de esta manera las diferencias sociales entre una población de propietarios privados capitalistas y la masa trabajadora no propietaria.

Durante los últimos tiempos, el Estado se ha ido convirtiendo en un negociador de intereses particulares, más que en representante del interés general. Por ejemplo, desde los años cincuenta, los gremios de industriales, comerciantes, terratenientes y, en general, los representantes del capital, se fortalecieron e incluso invadieron los primeros papeles de la escena política: “El sector popular quedó desprotegido en su representación y percibió que esta tampoco quedaba garantizada por los voceros políticos” (Tirado, 1989). En el caso colombiano, algunos estudios han determinado que la construcción de lo público está mediada por variables estructurales, como la corrupción, el clientelismo, el narcotráfico y la violencia, convirtiéndose esta última en una variable fundamental en la constitución de lo público, porque la precariedad

del Estado no ha sido capaz de arbitrar el escenario de la admisibilidad del extraño (Guizado, 2001). Otras explicaciones, en cambio, dan razones históricas de la dificultad de modernización de la política en nuestro país. Por ejemplo, González plantea que la vida política colombiana esta mezclada con aspectos de política tradicional y moderna (González, 2005).

En efecto, por un lado están los trabajadores, directos miembros de la población económicamente activa no propietaria, empleados o desempleados, asentados de tiempo atrás de la ciudad o migrantes recientemente llegados a ésta, los cuales suelen aparecer en las estadísticas ocupacionales bajo las categorías de obreros, operarios, empleados, trabajadores de servicio y desocupados; por otra parte están los propietarios, miembros de la población económicamente activa que suelen ser designados con las categorías de patronos o empleadores, pero también con las de gerentes, administradores y funcionarios de categorías directivas: son los dueños o administradores de las fábricas, las tierras, los bienes inmobiliarios, los comercios, los bancos y las corporaciones financieras (Molina, 1977).

El espacio social bogotano de esta época se constituyó de la siguiente manera. En primer lugar, por las elites, cuyos miembros ocuparon los altos cargos de la industria, del comercio, de las finanzas y de la administración pública; en segundo lugar, por una clase media, constituida por los profesionales formados para cargos intermedios en el sector público y privado; en tercer lugar, una clase popular configurada por varias fracciones: por un lado, por las fracciones trabajadoras, conformadas por obreros y gente dedicada a oficios independientes, habitualmente con bajos niveles de cualificación; por otro lado, por las fracciones subempleadas, constituidas por los agentes de las economías informales, y finalmente, por las fracciones marginadas, desempleados o desocupados terminales que no tenían espacio alguno dentro de la estructura socioproductiva urbana (Serna, 2006b).

Esta clasificación de las clases sociales por ocupación y propiedad evidencia una sociedad que, al tiempo que se estaba ordenando

espacialmente, se estaba caracterizando culturalmente. Si bien es cierto que a partir de 1950 se había impulsado el crecimiento de la ciudad, también era claro que ésta se fragmentaba espacialmente, generando diferencias de clases muy marcadas que se venían ocultando en las dinámicas del barrio; el cual era el foco espacial propicio para llevar a cabo un estilo de vida en la cotidianidad distante de las demás clases sociales, donde por razones económicas tendían a estar próximas únicamente en los entornos laborales. Desde los años sesenta, se comenzó a impulsar el desarrollo de la ciudad hacia el occidente, con dos grandes proyectos: ciudad de Kennedy y Modelia, este último proyectado por la inversión privada. A partir del éxito de estos desarrollos urbanos, se comenzó a impulsar la idea de crear ciudades dentro de la ciudad, cuyo modelo más completo fue Pablo VI. La característica común a todos ellos fue la articulación ya no a una plaza dominada por una iglesia, sino a centros y calles comerciales (Cortés, 1997). Estas fragmentaciones espaciales condujeron a la constante desaparición de un proyecto colectivo de ciudad, en el que se reconocieran las diferencias sociales en la proximidad. De este modo, el espacio social de la ciudad, dividido por las limitaciones y las contradicciones de la estructura socioproductiva que lo soportaban, desactivó lo urbano como patrimonio colectivo (Serna, 2006b).

Esta desactivación de lo urbano como escenario para todo público, alimentó las diferencias barriales, que a su vez se nutrieron de las ganancias de localización del lugar habitado, donde la ubicación del espacio físico devenía en capital simbólico, al representar distinción, indispensable para la pertenencia a una clase social determinada. Las escasas apuestas urbanísticas, sumadas a los embates del Bogotazo, que logro que el centro de la ciudad perdiera aún más el valor urbanístico y social –ya que varias de las construcciones consideradas patrimonio histórico fueron demolidas a causa del mal estado en que quedaron–, completaron el panorama de devaluación espacial y un estancamiento en los proyectos urbanos de la zona centro: Teusaquillo, La Soledad, Palermo y Chapinero. De hecho, la situación de esta parte de la ciudad

se hizo más crítica desde finales de los años ochenta, con la principal intervención urbanística de aquellos años: la readecuación de la avenida Caracas para convertirla en una troncal (Serna, 2006b).

Sin embargo, para evidenciar la devaluación y el posicionamiento que otrora tenían estos espacios, es preciso remontarnos unos años atrás, con el fin de observar los cambios urbanos. En este orden de ideas, se encontraron algunas manifestaciones del fenómeno descrito en los relatos de diferentes personas en la década del setenta. Ahora bien, la planificación de la ciudad para ese momento contaba, como ya se ha mencionado, con algunos proyectos en el occidente de la ciudad, donde, gracias al Instituto de Crédito Territorial (INSCREDIAL), muchas familias, especialmente de clase media, lograron adquirir su vivienda; sin embargo, este tipo de lugares era percibido por algunos sectores como de mal gusto, no propicios para la gente decente. En este sentido, aparece el relato del señor Rejo, de 60 años, que proviene de una familia adinerada de agricultores y quien habitaba en un barrio en transformación, el Bosque Izquierdo, el cual para la época era símbolo de distinción.

Aquí el gobierno trata de hacer muchas cosas por la gente baja. Por ejemplo, el Instituto de Crédito Territorial hace una serie de casas, en serie, de muy mal gusto, que después se convierten en tugurios. Parecen casitas de muñequero. Y las multifamiliares que hizo el Banco Central Hipotecario tampoco creo que funcionen. La gente en Bogotá no está preparada para vivir en esas casas. Imagínese que son 250 apartamentos y cada familia con cuatro niños o sea mil niños ¡cualquiera vive ahí! Eso tiene que ser un infierno. La gente aquí es muy sucia y aquí no barren y los niños tiran las cascaras y las señoras también dejan el trapo sucio por ahí! y eso es una cosa tremenda! (Castillo, 1977)

La anterior percepción da cuenta de cómo las elites conservaban el dominio sobre el espacio material, ya que sus mansiones eran difíciles de copiar gracias a su majestuosidad y a los materiales en que estaban construidas. Adquirir una casa de tipo inglés, con su antejardín, se convirtió en una necesidad de primer orden (Rawitscher, 2000).

En realidad, esta es la percepción de la ciudad de antaño, en la que el crecimiento urbano respondía a la aparición de la estructura moderna de clases. Esta organización espacial se encontró acorde con unos estilos de vida que se pueden identificar por su proximidad (en el caso de las clases altas), por la búsqueda de proximidad (en el caso de las clases medias) y por el distanciamiento (para el caso de las clases bajas) de la modernización en la ciudad. No obstante, este proceso tuvo una particularidad en este período: en la imposición de unas formas de la existencia legítima por parte de la burguesía, se observa un ensimismamiento de este grupo como clase. Las estrategias simbólicas que daban cuenta de su estilo de vida actuaban con un lenguaje que tenía como horizonte a la burguesía misma. Ello se demuestra en el cambio que se presentó en cuanto al espacio urbano que se buscó imponer en el período 1910-1938, que tuvo como objetivo la disposición de unos espacios públicos para la ciudad; reformas que querían hacer una ciudad para la contemplación, para los burgueses, pero contando con una reforma que abarcaba todo el espacio urbano (Chavarro y Llano, 2005).

En realidad, el sitio donde se vivía seguía siendo para la época un instrumento por medio del cual se obtenían ganancias, como las buenas amistades, que lograban posicionar a las personas en la escala social, aunque se viviera de apariencias. De acuerdo con lo anterior, aparece el relato de Juan Andrade, quien vivió en el barrio Palermo, considerado un barrio de clase media:

Nosotros siempre fuimos de una familia humilde, pero mis padres por más pobreza que tuvieran, siempre buscaron un medio social, más que todo de representación... es decir... vivimos en este barrio no porque exactamente podamos vivir en él, sino porque hacemos grandes sacrificios y, afortunadamente todos trabajamos [...] claro que nosotros quisiéramos conseguir una vivienda propia, pero es muy difícil. Por un lado, los planes del INSCREDIAL, que estarían a nuestro alcance, pero tendríamos que sacrificar el sitio y los materiales. Esas casas son hechas de muy malos materiales. Por otro lado, están los planes fabulosos

de compañías privadas, pero que son imposibles para una clase media. Los planes del gobierno favorecen a empleados y a la clase obrera y nosotros pertenecemos a una clase independiente de comerciantes, que sobrevivimos a base de muchas pericias y no podemos considerarnos dentro de las clases favorecidas; prácticamente vivimos a la deriva. No tenemos ninguna protección del gobierno. Por el contrario, los impuestos y las cargas caen sobre nosotros. Tal vez lo mejor sería tratar de conseguir un lote donde uno pudiera hacer una casa y conocer los materiales que fuera a utilizar, así como tener control sobre lo que fuera a invertir, no sea que resulte un engaño, como en muchas urbanizaciones, que le cobran a uno cuatro veces el valor de la lámina de eternit. Habrá que seguir viviendo en arrendado hasta que resulte una lotería por ahí... (Castillo, 1977, p. 170)

De acuerdo a lo anterior, la vivienda ya se postulaba para la época como un mecanismo simbólico de diferenciación social. Era posible encontrar el lugar de residencia como un bien necesario o de lujo. Algunas casas estaban caracterizadas por estar construidas con materiales durables, pero con pocas posibilidades de poseer zonas verdes y acceso a centros comerciales, disponibilidades de electrodomésticos y número de cuartos por función. En el estrato alto se supone que existen una o más dependencias del hogar por función (sala de recibo, comedor, estudio, un cuarto por cada miembro, garajes, etc.) y es posible que existan dependencias para otro tipo de funciones (sala de música, biblioteca, invernadero...) (Molina, 1977).

Para observar un poco más de cerca la dinámica de este momento es necesario remitirnos a un estudio que fue realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en siete ciudades del país, donde, por supuesto, se encontraba Bogotá.

Tabla 1.

Relación entre estrato, ingreso mensual y número de personas por cuarto

Estrato de muestra	Ingreso mensual per cápita (COP)	Número de personas por cuarto
Bajo-bajo	Menos de 100	8 o más
Bajo	100-299	5,5- 7,9
Medio-bajo	300-599	3,5-5,4
Medio	600-1.199	2,5-3,4
Medio-alto	1200-1799	1,5-2,4
Alto	1800 o más	Menos de 1,5

Fuente: DANE, encuesta de hogares de 1970, tabulados no publicados, en Molina, (1977, p. 237).

En suma, la vivienda de la clase alta contaba con una amplia disposición de espacios y con mayores ingresos, que permitían un estilo de vida proclive al consumo de bienes suntuarios, fortaleciendo la imagen de vivir bien en la ciudad; por supuesto, con todos los servicios públicos, que para la clase media y baja resultaban bienes necesarios para la subsistencia. Sin embargo, otra era la suerte del estrato bajo-bajo, que ni siquiera tenía acceso a los servicios básicos como el agua.

Los barrios marginales y la devaluación del espacio

El agua como un bien necesario y escaso

¿A quién le pertenece el agua? ¿Es propiedad privada o comunitaria? ¿Qué tipo de derechos tiene o debería tener el pueblo? ¿Cuáles son los derechos del Estado? ¿Cuáles son los derechos de las corporaciones y de los intereses comerciales? A lo largo de la historia, las sociedades se han planteado estas preguntas fundamentales.

Vandana Shiva. *Las guerras del agua*.

En el mercado de vivienda del país, la construcción popular fue muy característica para la década del setenta, ubicando los terrenos en ocasiones en las zonas más apartadas de la ciudad o en urbanizaciones especulativas sin servicios públicos. Estos asentamientos generalmente se daban en los barrios de invasión y las urbanizaciones piratas.

En el caso de los primeros, que en Bogotá son poco numerosos, este proceso se origina en la ocupación de hecho de un terreno por un grupo de familias, que si tienen éxito en la invasión, comienzan a construir sus viviendas por etapas y posteriormente a dotarse de servicios públicos a veces con apoyo del gobierno local. En el caso de las urbanizaciones piratas su origen es la venta por parte de un empresario privado de lotes sin obras de urbanización [...], el proceso de desarrollo

progresivo de la vivienda y de los servicios es, sin embargo, similar al de los barrios de invasión. Este tipo de urbanizaciones alojan al 45 por ciento de las familias de Bogotá. (Valenzuela y Vernez, 1977, p. 98)

En realidad, las dificultades de acceso a los servicios públicos como el agua se resolvían acudiendo a la inventiva del ciudadano desarraigado de la estructura de clases, ya que era común encontrar zanjas para canalizar las aguas lluvias, que podían resolver el problema inmediato de suministro de agua. En este orden de ideas, se acudió a un relato de un ciudadano bogotano, don Miguel, quién habitaba en el barrio Las Delicias, que para esta época se consolidaba como una zona de explotación arenera.

Este barrio ha ido modificándose en los últimos diez años. Para nosotros que realmente hemos vivido en este barrio desde cuando no tenía ningún servicio, hoy en día nos sentimos reyes. Imagínese usted que tenemos agua, luz y teléfono, capilla, escuela. Claro que eso es aquí abajo. Allá arriba la pobreza es aterradora. Eso sí la gente de allá es muy honrada y muy buena y no tenemos ningún problema con ellos. A veces nos llaman los oligarcas porque tenemos servicios y se sienten olvidados. Pero no es así, nosotros tratamos de ayudarlos a ellos. (Castillo, 1977, p. 482)

Las viviendas del barrio Las Delicias, al sur de la ciudad, no cuentan con el servicio de alcantarillado, por lo que tienen que acudir a trabajos rudimentarios, como la construcción de desagües a través de una zanja en la que corre agua en invierno. En verano, la zanja se convierte en un foco hediondo, donde se originan toda clase de epidemias. El servicio de agua cubre todo el barrio. Las casas construidas en la parte alta de la montaña carecen de este servicio y están habitadas por familias de 10 y 12 personas en condiciones infrahumanas (Castillo, 1977, p. 481).

Como ya se ha mencionado, la transformación y expansión de la ciudad comenzó a buscar nuevos referentes, distantes del perímetro urbano, para albergar a familias de clase media, con varios hijos, por medio de los proyectos del Banco Central Hipotecario. Ciertamente,

estos nuevos proyectos tendrían como uno de sus propósitos principales aprovechar terrenos vírgenes para el avance urbano, desmantelando poco a poco las haciendas, fincas y humedales para convertir los terrenos rurales en urbanizaciones de casas en serie. Como muestra de lo anterior, está el barrio Niza, construido sobre pantanos, en el sector del hoy conocido Humedal de Córdoba. Por supuesto, las dificultades de acceso a la ciudad en este lugar eran enormes, ya que no se contaba con transporte público ni vías de acceso; aunque se estaba urbanizando el humedal, la vida seguía teniendo características rurales, con plantas, lagos animales y muchas zonas verdes, espacios propicios para la recreación.

Sin embargo, el manejo del agua por parte de las clases medias –que poco a poco interiorizaban el lugar– y las clases altas –que utilizaban los espacios para consolidar los lagos como espejos de agua necesarios para la propiedad privada por medio de los clubes– contrasta las grandes diferencias de su uso como bien colectivo o privado. Para aclarar un poco este panorama, es necesario referenciar estas grandes diferencias a través de las percepciones del agua para la recreación y el caño maloliente.

De un lado tenemos los lagos recreativos, que sirvieron como excusa para la creación del club Los Lagartos y el club Choquenza. En este contexto, vale la pena anotar que estos proyectos privados prosperaron luego de una iniciativa para la construcción de un lago de recreación acuática de acceso público. Los mismos habitantes detuvieron tal propuesta, gracias a un crecimiento de su conciencia ambiental frente al humedal; sin embargo, no se puede negar que

los lagos artificiales en los clubes son el resultado de una apropiación privada del agua como bien público. No son de libre acceso y la mayoría de los residentes no puede disfrutar de su presencia, aunque las aves sin duda aprovechan ese espacio, ya que para ellas es difícilmente vedado. (Van der Hammen y Palacio, 2006, p. 165)

En oposición a la dinámica privada aparece la percepción del humedal como un caño maloliente, que es necesario tapar para evitar

infecciones y epidemias. El caso de este barrio es demasiado interesante para constatar las visiones de los agentes que, en la búsqueda de una forma para tener una vivienda, acceden a las opciones dadas por las empresas urbanizadoras para consolidar una visión antropocéntrica sobre una visión biocéntrica de la naturaleza. En este sentido, el humedal era concebido como un caño de ratas, según una historia barrial de la época, realizada por Josefa de Campos,

Nuestro Humedal de Córdoba se convirtió en receptor de basuras, pasto que salía de los jardines y escombros de las obras que se hacían en el barrio y la depredación de gentes extrañas a la urbanización, que hasta llegaron a convertirlos en corral de vacas con el fin de criarlas ahí. (Van der Hammen y Palacio, 2006, p. 165)

Esta concepción de urbanizaciones dentro de un espacio rural caracterizado por la vida de pueblo logró paulatinamente encajar con las dinámicas propias de sus habitantes, que intentaban interiorizar la práctica del cuidado de la naturaleza y del recurso hídrico. El uso del espacio, del lugar y su importancia, como el caso del Humedal Córdoba, “ha pasado por una historia de concepciones [...], desde chucua, pantano, lago, chamba, caño, botadero y parque, hasta llegar a la denominación actual de humedal” (Parias y Palacio, 2006).

En esta vía de la vida rural, encontramos el caso de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en donde a mediados de los setenta, y gracias a la alta movilización hacia la ciudad que se instalaba en la periferia del casco urbano, se crearon los acueductos comunitarios. La dinámica de este sector era todavía rural. Allí, por supuesto, la agricultura era el centro de manutención de sus habitantes. El robo de agua continua de otras veredas para poder suplir las necesidades de la siembra suscitó varios enfrentamientos.

Periódicamente se desviaba el agua de un nacimiento o del cauce de una quebrada hacia las fincas, sectores de veredas o veredas completas, pero al incrementarse la demanda, al tecnificar cultivos de papa y la ganadería lechera, se hizo necesario

acceder a mayores consumos de agua y por períodos de tiempo más prolongados, dando lugar así a los conflictos: Un hato ganadero o un cultivo intensivo de papa consumen igual o mayor cantidad de agua que todos los habitantes de una vereda; el hacendado o finquero con mayor poder en los períodos de fuerte verano (julio, agosto, enero, febrero) desvían el agua dejando al resto de pobladores sin el recurso por días o semanas. (Peña, Reyes, y García, 2009)

La situación y el conflicto del agua se agravó por el cambio climático, que se expresa en períodos de verano más prolongados e inesperados, y generó a mediados de los setenta verdaderas batallas campales entre vecinos. Ellos, armados de machetes, palos, piedras y ocasionalmente armas de fuego, se enfrentaron por apropiarse o desviar los cauces de canales y quebradas para luego permanecer días o semanas prestando guardia con el fin de mantener el flujo de agua hacia sus fincas (Peña, Reyes y García, 2009).

En síntesis, la ciudad de Bogotá, en las décadas del 70 y 80, aunque aparentemente estaba amparada por un efímero desarrollo industrial y tecnológico, rápidamente entró en contradicción, al presentarse una economía conservadora que detenía la movilidad social y mantenía oligopolios fuertemente estabilizados. De esta manera, el capital económico no logró con fuerza dinamizar el espacio físico de la ciudad y con ello potenciar la proximidad de sus habitantes a partir de un dispositivo estético como la urbanización, cuyo efecto estaba dirigido a lograr aglutinar a las diferentes clases sociales en el espacio social. Realmente lo que se consiguió fue un aislamiento y distanciamiento de las clases sociales por medio de espacios altamente simbolizados por capitales sociales, económicos y valoraciones espaciales, que permitían la obtención o no obtención del recurso hídrico.

En definitiva, el agua como elemento vital, estaba dispuesta más para unas clases sociales que para otras. Era posible, en los escenarios periféricos de la ciudad, no encontrarla, ya que allí no llegaban los sistemas de alcantarillado, además porque eran espacios físicos devaluados,

que se correspondían con la devaluación social de sus habitantes, quienes se dedicaban a seguir existiendo socialmente dentro de sus propios espacios de reconocimiento.

Hacia la naturalización del desperdicio del agua: consumo y privatización del agua

En la década de los noventa, Bogotá entró a los circuitos de la llamada apertura económica, a través del modelo neoliberal, que buscaba la liberalización de las barreras arancelarias para dejar la dinamización económica en manos de la propia economía, evitando al máximo la intervención estatal. En efecto, estas dinámicas de apertura económica se instauraron de manera definitiva en el país, en un escenario de reformas institucionales que perseguían, por supuesto, los cambios estructurales que caracterizan a la globalización económica³.

Sin embargo, la dinámica económica en el país no estaba preparada para una apertura económica de tal envergadura, ya que el sistema manufacturero no tenía en su lógica la expansión de su aparato productivo. Paradójicamente, el sector empresarial estaba de acuerdo con la apertura, ya que ellos mismos habían contribuido al crecimiento acelerado del ahorro financiero, consolidando grandes grupos económicos y financieros.

Estos cambios en la economía quedaron sellados en julio de 1991, cuando se adoptó la nueva constitución en Colombia, bajo el esquema de la modernización institucional. Allí se incluyeron las políticas

³ La globalización ha sido entendida como una época que deviene de la modernidad, en el sentido de que implica un cambio cultural y económico en el que el concepto espacio-tiempo es reconfigurado. Las distancias que otrora eran lejanas se muestran como espacios que se acortan a través del efecto virtual de la tecnología y los avances en esta rama. Esto aumenta la capacidad del transporte, rompiendo los records de velocidad y, por supuesto, del tiempo.

de apertura económica y privatización, que según Ahumada (1996) se convierten en normas constitucionales por primera vez. El Artículo 336 señala que el gobierno podrá enajenar o liquidar empresas monopolísticas del Estado y otorgar concesiones a terceros para generar un ambiente propicio para el inversionista.

El gobierno de César Gaviria acogió la apertura económica como estrategia central de la economía, la cual ofrecía una serie de paquetes: apertura comercial, desregulación y desreglamentación (eliminación de permisos, licencias, etc.), eliminación del control de cambio, reforma laboral, privatización de empresas industriales y comerciales (incluidos los servicios públicos, como telecomunicaciones, televisión, generación de energía eléctrica), apertura para el sector privado (grandes grupos, incluidos sectores hasta el momento de monopolio estatal, como las telecomunicaciones, refinación del petróleo, generación eléctrica, fondos de cesantías y de pensiones, entre otros). Esto no podía ser sino atractivo y seductor (Arango, Misas y López, 2006).

En cuanto a reformas administrativas, lo más característico fue la fusión de entidades públicas, en el marco del proceso de reducción del Estado, con el fin de la no intervención en la economía. Se hace necesario, entonces, la reducción del gasto público para que funcione el modelo neoliberal, ya que lo que se busca es generar un ambiente propicio para los inversionistas que, atraídos por la mano de obra barata, conseguida con la reducción de salarios y prestaciones sociales, inviertan en el país.

En referencia a la cuestión laboral, con la Ley 50 de 1990⁴ se ha venido presentando un debilitamiento de la estabilidad laboral y sindical. Esta ley consagra cambios profundos en las relaciones laborales y como consecuencia de ello las empresas, al contratar personal,

⁴ Esta ley propende por el desarrollo de la libre competencia y las oportunidades masivas de empleo.

evitan las pensiones y demás beneficios sociales a que tiene derecho cualquier trabajador. Es más, en nombre de la modernización de las empresas, se justifican los despidos masivos.

Reflexiones finales

De la ciudad de los noventa a la ciudad actual

Como se presentó en el apartado anterior, las transformaciones del espacio físico y las dinámicas económicas y sociales de Bogotá durante los últimos cincuenta años han producido distintos significados de los usos sociales del agua, que han venido transformándose de acuerdo con los cambios que se han generado. Es así como vale la pena citar algunos hechos relevantes que permiten la contextualización reciente de las dinámicas de la ciudad y brindan un insumo importante para el análisis de las representaciones estudiadas posteriormente en este capítulo.

La concepción de ciudad en Colombia para la primera década del siglo XXI, está pensada de acuerdo a las dinámicas poblacionales actuales, en el que se busca evitar el crecimiento desmedido y poco planificado de la misma. En consecuencia, el plan de ordenamiento territorial (POT), se convierte en una herramienta fundamental para la planeación del crecimiento urbano en las ciudades colombianas a partir de la ley 388 de 1997, donde se extiende la planeación a diez años. Es importante anotar que el fenómeno de desplazamiento forzado por causa de la violencia ha acarreado el mayor número de víctimas del conflicto armado colombiano. Como lo establece González (2005), al citar un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes de 2003), 2,9 millones de colombianos y colombianas se han desplazado desde 1985, en lo que se ha descrito como la mayor crisis humanitaria y de derechos humanos en nuestro país. Al respecto, es importante resaltar que los espacios para

acoger tal dinámica se han convertido en verdaderos guettos, donde sus habitantes tienen la característica de ser doblemente excluidos: del campo y de la ciudad.

Un balance de las últimas seis décadas de historia social urbana en Bogotá muestra lo siguiente: desde los años cuarenta hasta los años noventa del siglo XX, el porcentaje de la producción de vivienda ilegal ocupó, en promedio, el 42% de la totalidad de la vivienda construida. En 1973, el promedio de producción de este tipo de vivienda alcanzó el 49,88%; en 1986, 52% del total de vivienda construida, y, en 1991, alcanza la cifra del 55%. A partir de la década de los noventa cambia la perspectiva normativa respecto a los barrios no legalizados y las cifras empiezan a descender (Jaramillo, 2003).

A esta tendencia al ordenamiento territorial en las ciudades colombianas es importante anteponerle la necesaria tarea de abastecimiento de agua para la ciudad. En efecto, existe una correspondencia entre el desarrollo urbanístico y la dotación de fuentes de agua, como lo recuerda Antanas Mockus, en su primer período de alcalde de Bogotá: “el desarrollo urbanístico de las ciudades concuerda con la ampliación y dotación de nuevas fuentes de agua. Es claro que de no haberse construido Chingaza o las que le antecederon, la ciudad no tendría hoy siete millones de habitantes” (Mockus, 1997).

De acuerdo con lo anterior, la ciudad, junto con el crecimiento poblacional, ha determinado un incremento progresivo de la intervención en el territorio, para poner sus aguas al servicio del crecimiento urbano, señalando de paso los límites de dicho crecimiento. Según esto, “se espera que un nuevo proyecto de abastecimiento debe entrar en operación en el año 2010, manteniendo el criterio de que debe darse cuando se alcance el 0,90 de la oferta de agua” (Colmenares & Mira, 2007). Si se presenta lo que el POT denomina “escenario bajo”, es decir, un crecimiento poblacional menor al esperado, las obras de expansión podrían aplazarse hasta el 2017. Estas proyecciones incluyen a los municipios actualmente atendidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cuales representan el 11% de la demanda (Colmenares & Mira, 2007).

En realidad, la dotación de agua para la capital ha dejado de basarse en sus propias fuentes de suministro, para ser aprovisionada por referentes externos.

El agua que se consume en Bogotá, que antes de los años treinta procedía aún de los cerros orientales inmediatos a la urbe, hoy procede de una red de sistemas hidrográficos que nutren en una medida que sobrepasa el 50% del agua consumida en la ciudad, de la vertiente oriental del país, a través de la región paramuna de Chingaza, vertiente de la macro cuenca del Orinoco. (Jaramillo, 2003)

De esta manera, la demanda de agua para la capital concuerda con su crecimiento urbano y demográfico. El consumo se ve sometido a un modelo económico depredador que ve en los procesos de crecimiento urbano una oportunidad única para ofertar el agua, que en su gran mayoría proviene de fuentes naturales ajenas a la ciudad, ya que esta hace poco uso de las aguas subterráneas.

En relación con las aguas subterráneas, Colombia es un país de una oferta hídrica superficial suficiente y de sobra para atender sus requerimientos, puesto que en el territorio ocurre una pluviosidad promedio de 3000 mm al año, lo cual genera suficiente agua para mantener la recarga permanente de los cauces. La mayoría de esa agua llega casi intacta al mar o a la cuenca del Orinoco, y pareciera que la sociedad colombiana no la requiriera. Los grandes asentamientos no usan esos ríos, por el contrario, se valen de las fuentes pequeñas no instrumentadas, muy vulnerables tanto por la dinámica de las lluvias como por los regímenes (Mira, 2009). Es así como la ciudad cuenta para potencializar la venta de este recurso en la capital con abundantes fuentes de agua relativamente cercanas, lo cual no es frecuente en establecimientos urbanos construidos a tal altura, por lo demás escasos en el planeta.

Hoy en día, es casi total el cubrimiento de servicios básicos en la ciudad –los índices para 1999 señalan que la cobertura de acueducto domiciliario en esta ciudad alcanzó el 98%, mientras en 1905 apenas el 3% de habitantes contaba con

el servicio. La cobertura de la red de energía eléctrica tiene un cambio similar, así como la de comunicaciones sufre una creciente multiplicación de líneas de conexión, de 13 000 líneas manuales en 1948, a 2 242 000 en 1998—, lo cual ha sido posible en parte por la expansión de los programas de legalización promovidos por las entidades prestadoras de servicios. Sin embargo, aproximadamente 1 400 000 personas, que equivalen a casi medio millón de construcciones en Bogotá, sufren de forma crítica riesgos por deslizamientos geológicos, sísmicos o por inundaciones causadas por la posición de las construcciones, debajo de la altura del cauce de ríos aledaños o en lugares susceptibles de desbordamientos en temporada de lluvias. (Jaramillo, 2003, p. 151)

De acuerdo con lo anterior, la oportunidad que ofrece la ciudad para brindar el recurso en realidad no busca un equilibrio entre la administración de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades personales. Su uso desmedido se aleja de la connotación de las ciudades con escases de agua, donde la imagen de la posibilidad futura de racionamientos severos ante su escasez está directamente relacionada con el agotamiento de las fuentes naturales.

En Bogotá son pocas las contenciones que operan sobre el consumo desmedido del agua, que se refieren a una imagen de la conciencia sobre las acciones individuales, buscando la correlación entre consumo y satisfacción de necesidades personales para influenciar a la sociedad futura. La conciencia ambiental de los bogotanos, según la Encuesta Nacional Ambiental, que entrevistó a 3663 personas cara a cara en doce ciudades del país, advierte que a pesar de que más de la mitad (51 por ciento) de las personas les preocupa que el mayor daño en el país sea el agotamiento de las aguas de los ríos y el relleno de los humedales, el 32 por ciento de esa mitad reconoce que ha derrochado el líquido en su hogar⁵.

⁵ *El Tiempo*, 7 de noviembre de 2008. *Colombianos exigen cuidado del ambiente, pero hacen poco por él*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3176732>

Las tarifas de acueducto y alcantarillado refuerzan este comportamiento. La distribución desigual en el alza de los precios permite que los estratos más altos puedan derrochar aún más el agua porque les cuesta menos. En el caso de Bogotá, las tarifas de acueducto y alcantarillado, en términos reales, crecieron entre 1997 y 2002 de la siguiente manera: 232% en el estrato 1, 138% en el estrato 2, 110% en el estrato 3, 59% en el estrato 4, 43% en el estrato 5 y 39% en el estrato 6 (Espinell, Martínez y Peña, 2006, p. 23).

La política tarifaria toma en cuenta un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo, lo que implica que, a mayor gasto en unidad de consumo, el precio del agua tiende a bajar, perjudicando a quienes consumen menos porque siempre pagan el cargo fijo. Así las cosas, los estratos más altos son los que más consumen agua al día, reafirmando las distancias sociales que implica el consumo desmedido del recurso. Se evidencia su uso con necesidades suntuosas, como el lavado del carro, garajes, calles, el mantenimiento del jardín, demasiado tiempo bajo la ducha, lo que implica una aproximación al agua en situaciones de meditación. La anterior situación se puede ver en las cifras arrojadas en el consumo de agua en Bogotá, según datos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: un habitante de estrato 5 y 6 consume por día en promedio 101 litros, mientras que uno de estrato 1 y 2, 73 litros; la situación en cambio del estrato 3 muestra que el consumo diario es de 72 litros, lo que indica que es el sector de la población bogotana que más tiende al ahorro del agua⁶.

Bogotá, en la primera década del siglo XXI, vio crecer la necesidad de conciliar lo urbano con el abastecimiento de las necesidades básicas. A la par que el crecimiento urbano necesitó una planeación, la regulación del agua se hacía evidente; sin embargo, el agua en Bogotá

⁶ *El Tiempo*, 7 de noviembre de 2008. *Colombianos exigen cuidado del ambiente, pero hacen poco por él*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3176732>

se posiciona cada vez más como un negocio amparado por un sistema económico donde lo que cuenta son los niveles de rentabilidad, olvidando una concepción de agua amarrada a representaciones sociales que protegen su ciclo y tienden a su ahorro.

Referencias

- Ahumada, C. (1996). El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. El Áncora Editores. Arango, C., Misas, M., López, E. (junio de 2006). Economía subterránea en Colombia 1976-2003: una medición a partir de la demanda de efectivo. ESPE, 50, 154-211. Arriagada, C. y Rodríguez, J. (2003). *Segregación residencial en áreas metropolitanas de América Latina: magnitud, características, evolución e implicaciones de política*. Santiago de Chile: Cepal.
- Arrojo, P. (2005). *Conferencia inaugural del Primer Encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina*, Fortaleza, Brasil.
- Augé, M. (1993). *Los no lugares. Espacios del anonimato para una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Gedisa.
- Bachelard, G. (1993). *El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, P. (1999). *Efectos de lugar en la miseria del mundo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995). *Respuestas por una antropología reflexiva*. México: Grijalbo.
- Cantero, A. P. (1999). *La memoria del agua (valores, usos y representaciones del agua en las ciudades del sur). El agua a debate desde la Universidad: hacia una nueva cultura del agua: 1er Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación de Aguas*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. Castillo, C. (1977). *Vida urbana y Urbanismo*. Bogotá: Andes.

- Chavarro, C. y Llano, F. (2005). El espacio social en Bogotá (1880-1950). En *Memorias prácticas e imposiciones culturales: patrimonio histórico en Bogotá 1880-1950* (Tesis de pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá.
- Colmenares, R. & Mira, J. (2007). Paradojas del agua en Colombia. Privatización y alternativas públicas. Colombia: *Un Futuro Sin Agua?*. Bogotá: Ecofondo.
- Cortés, G. (1997). La evolución del ordenamiento espacial en Santa Fe de Bogotá. *Colombia Cuadernos de la Capital*, 3.
- Crespo, C. (2000). Continuidad y ruptura: la "guerra del agua" y los nuevos movimientos sociales en Bolivia. *Revista del Observatorio Social de América Latina*, 2.
- Espinel, C., Martínez, H. y Peña, Y. (2006). La cadena del plátano en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. *Documento de trabajo*, 12.
- González, F. (2005). Soberanía popular y crisis del bipartidismo: entre la política tradicional y la política moderna. *CINEP*.
- González, C. y Flores, L. (1997). Industria y desarrollo urbano en Colombia. En *Vida urbana y urbanismo*. Bogotá: Andes.
- Guizado, A. (2001). Democracia, exclusión social y construcción de lo público en Colombia. A. Gutiérrez Valencia (Ed.), *Exclusión social y construcción de lo público en Colombia*. Bogotá: CIDSE, CEREC.
- Jaramillo, J. M. (2003). Figuras, usos y valores del agua en Bogotá. *Revista Colombiana de Sociología*, 3(1), 147-163.
- Katzman, R. (2001). Seducidos y abandonados. *CEPAL*, 75, 171.
- León, N. (agosto de 2008). Bogotá: de paso por la capital. *Credencial Historia*, 224.
- Luna, J. R. (2004). *Representaciones sociales del uso y distribución del agua en poblaciones marginadas*. Investigación presentada en el Programa Binacional del Agua y la Vinculación de la Región Paso del Norte, México.

- Mejía, G. R. (2000). *Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 1820-1910*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Mira, J. (2009). *Dos millones de firmas por el agua*. Bogotá: Corporación COFONDO.
- Mockus, A. (1997). El agua, factor de justicia social en Bogotá. En *El agua en la historia de Bogotá, 1538-1937*. Tomo I. Bogotá: Villegas Editores.
- Molina, H. (1977). La vivienda como bien necesario. En *Vida urbana y urbanismo*. Bogotá: Andes.
- Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires: Huemul.
- Páez, D. (1987). *Pensamiento, individuo y sociedad*. Buenos Aires: Fundamento.
- Páez, D. (1992). *Teoría y medio en psicología social*. Madrid: Anthropos.
- Páramo, P. y Cuervo, M. *Historia social situada en el espacio público de Bogotá desde su fundación hasta el siglo XIX*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Parias, A. y Palacio D. (Eds.). (2006). *Construcción de lugares-patrimonio. El centro histórico y el Humedal de Córdoba en Bogotá*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Colciencias.
- Parra Sandoval, R. (1977). La expansión de la escolaridad en Colombia. *CEDE de la Universidad de los Andes*, Documento 037, Bogotá.
- Peña, D., Reyes, J. y García, J. (2009). Un caso de acueductos comunitarios: El Tunjuelo, Bogotá. En *Colombia, ¿un futuro sin agua?* Bogotá: Ecofondo.
- Peralta, V. (1995). *El ritmo lúdico y los placeres en Bogotá*. Bogotá: Planeta.
- Perry, L. (1989). Economía, café, industria. En *Nueva Historia de Colombia*. Tomo V. Bogotá: Planeta.
- Popper, K. R. (1978). *La lógica de las ciencias sociales*. México: Grijalbo.
- Rabinow, P. (1991). Las representaciones son hechos sociales: modernidad y postmodernidad en la antropología. En *Retóricas de la antropología* (pp. 318-356). Berkeley: Universidad de California.

- Rama, A. (1984). *La ciudad letrada*. Monterrey: Ediciones del Norte.
- Rawitscher, P. (2000). *Vistiendo y desvistiendo la modernidad: El centro de Bogotá en los siglos XIX y XX*. Bogotá: Universidad de Los Andes.
- Rendón, J., Acevedo Nieto, P. y Barreto, D. (julio-diciembre de 2005). La búsqueda de enfoques para el desarrollo. A propósito del debate entre el Consenso de Washington y el Fórum de Barcelona. *Revista Equidad y Desarrollo*, 4, 47-64.
- Rodríguez, C. (2002). *Agua: representaciones y creencias del ahorro y el dispendio*. México: Universidad Autónoma de México.
- Rodríguez Gómez, J. C. (2003). *El agua en la historia de Bogotá*. Bogotá: Villegas Editores.
- Rodríguez Gómez, J. C. y Villegas, B. *Historia de Bogotá*. Tomo 2. Siglo XIX. Bogotá: Villegas Editores.
- Rudé, G. (1980). *Revolución popular y conciencia de clase*. México: Grijalbo.
- Ruiz, J. I., Ponce de León, E. y Herrera, A. N. (2001). *Avances en medición. Evaluación en psicología y educación*. Bogotá: Universidad El Bosque.
- Saldarriaga, A. (2002). *La arquitectura como experiencia. Espacio, cuerpo y sensibilidad*. Bogotá: Villegas Editores.
- Serna, A. (2004). Identidad ciudadana y vida pública: la cuestión de la alteridad. Avance de la investigación *La construcción de lo ciudadano. Una mirada interdisciplinaria a los campos constituyentes de la ciudadanía en Colombia. 1930-2000*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá.
- Serna, A. (2006a). *Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico.
- Serna, A. (2006b). Identidad ciudadana, lenguajes coloniales y conflicto social. En M. T. Cifuentes y A. Serna (Comps.), *Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Serna, A. y Gómez N. (2009). Remembranza, contradicción y ciudad. Apuestas metodológicas para indagar las memorias de

- los conflictos y las violencias urbanas. En A. Serna (Comp.), *Memorias en crisoles: propuestas teóricas, metodológicas y estratégicas para los estudios de la memoria*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Distrital.
- Shiva, V. (2002). *Las guerras del agua: Privatización, contaminación y lucro*. México: Siglo XXI.
- Tirado, A. (1989). *Nueva historia de Colombia*. Bogotá: Planeta.
- Torres López, T. (2008). Vida, frescura y limpieza: representaciones sociales del agua desde el punto de vista de adolescentes y padres de familia. *Medio Ambiente y Comportamiento Humano*, 9, 171-195.
- Valenzuela, J. y Vernez, G. (1977). Construcción popular y estructura del mercado de vivienda: el caso de Bogotá. En *Vida urbana y urbanismo*. Bogotá: Andes.
- Van der Hammen, M. y Palacio, D. (2006). Género y capital cultural en lugares-patrimonio. En A. Parias. Y D. Palacio (Eds.), *Construcción de lugares-patrimonio: El centro histórico y el Humedal de Córdoba en Bogotá*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Colciencias.
- Vargas, R. & Piñeyro. (2005). *El Hidroscopio*. Montevideo: Unesco, PNUMA.
- Viviescas, F. (julio de 1999). La urbe contemporánea y la pregunta por el medio ambiente (una aproximación crítica). *Revista Bitácora Urbano\ Territorial*, 1(3).
- Wacquant, L. (2006) Castigar a los parias urbanos. *Antropología y Arqueología Antípoda*, 2, 59-66.
- Worcester, R. M. (1995). Valores y actitudes sociales ante las dimensiones humanas del cambio medioambiental global. En *Tendencias mundiales de cambio en los valores sociales y políticos* (pp. 333-353). Madrid: Fundesco.
- Yory, C. (2001). La topofihia: una estrategia innovadora de desarrollo sustentable para las grandes metrópolis latinoamericanas en el contexto de la globalización. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 21, 119-136.